

# INFORMARTIVO DE RELATORIA

## MAYO 2024

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



## Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

## Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<b>Consejo de Estado</b> Sala de lo Contencioso Administrativo <b>Sección Primera</b> C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes	<b>Acción Popular</b>  <a href="#">17001 23 33 000 2019 00188 01</a>  Sentencia del 23 de noviembre de 2023
<p>La Sala conoció demanda de acción popular contra el INVIAS y el municipio de Aguadas por la falta de construcción de un puente peatonal en el sitio La María.</p> <p>La Subsección recalcó que, la jurisprudencia del Consejo de Estado justifica la intervención del juez popular en casos de malla vial cuando hay riesgo de desastre o accidentalidad, se evidencia daño a intereses colectivos y hay incumplimiento en plazos de proyectos en construcción.</p> <p>Pero que en este caso específico no se demostró transgresión de derechos colectivos, las autoridades actuaron dentro del margen del principio de planeación, y no se probó que la obra mitigara riesgos o daños materiales a intereses colectivos.</p> <p>La sentencia confirmó la decisión de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, pero exhortó a las autoridades a definir prioridades justificadas para el mejoramiento de la infraestructura vial.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<b>Consejo de Estado</b> Sala de lo Contencioso Administrativo <b>Sección Segunda</b> <b>Subsección B</b>  C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar	<b>Nulidad y Restablecimiento del Derecho</b>  <a href="#">13001 23 33 000 2016 01005 01</a> <a href="#">(2734-2021)</a>  Sentencia del 8 de febrero de 2024
<p>La Sala decidió recurso de apelación contra sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con la que se pretendía por parte de un Juez, el pago de varias prestaciones sociales tras una incapacidad por enfermedad profesional que superó los 180 días.</p> <p>Consideró el Alto Tribunal que la incapacidad se considera una situación administrativa que no interrumpe el vínculo laboral, por lo que el servidor mantiene el derecho a las prestaciones sociales establecidas por la ley.</p> <p>No obstante, el demandante no tiene derecho a que la Nación - Rama Judicial le pague las acreencias salariales reclamadas por el periodo de incapacidad, tales como</p>	

bonificaciones por servicios prestados, bonificaciones por actividad judicial y prima de servicios. Negativa que se fundamenta en que las entidades del sistema de seguridad social son responsables del pago del subsidio por incapacidad, las que se subrogan al empleador en la obligación de pagar el salario del trabajador incapacitado. Siendo actualmente, la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) quien realiza el pago del auxilio sobre el 100% del ingreso base de cotización.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<b>Consejo de Estado</b> Sala de lo Contencioso Administrativo <b>Sección Segunda</b> <b>Subsección B</b> C.P. Cesar Palomino Cortés	<b>Nulidad y Restablecimiento del Derecho</b>  <a href="#">25000 23 42 000 2014 00453 01 (0260 2019)</a>  Sentencia del 25 de enero de 2024
<p>La Subsección analizó recurso de apelación contra sentencia que negó las pretensiones de la demanda con la que se pretendía la nulidad de los actos administrativos que negaron el nombramiento en periodo de prueba de un participante en un concurso de méritos de la DIAN.</p> <p>La negativa se basó en una inhabilidad establecida en el artículo 10 del Decreto Ley 1072 de 1999, que impide el nombramiento de personas previamente destituidas de entidades estatales. El demandante había sido destituido anteriormente por no asistir como jurado de votación.</p> <p>La Sala consideró que la aplicación de esta inhabilidad en este caso específico no era razonable ni proporcional porque la destitución previa no estaba relacionada con el desempeño de funciones en la DIAN, no afectaba la idoneidad del demandante para el cargo al que aspiraba y no cumplía con el propósito moralizador de la función administrativa.</p> <p>El Alto Tribunal revocó la sentencia de primera instancia, y ordenó el nombramiento del demandante en periodo de prueba o en un cargo similar.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<b>Consejo de Estado</b> Sala de lo Contencioso Administrativo <b>Sección segunda</b> <b>Subsección B</b> C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera	<b>Nulidad y Restablecimiento del Derecho</b>  <a href="#">25000 23 42 000 2018 01641 02</a>  Sentencia del 15 de febrero de 2024

La subsección decidió recurso de apelación interpuesto contra sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con la que se pretendía la declaratoria de nulidad del acto de insubsistencia de un asesor de despacho del Procurador General de la Nación, cargo de libre nombramiento y remoción.

Consideró la sala que, i) aunque el cargo era de libre nombramiento y remoción, esto no exime al nominador de considerar condiciones especiales del empleado, ii) no es necesario un dictamen pericial o una pérdida de capacidad laboral del 50% para demostrar la diversidad funcional, iii) el demandante padecía polineuropatía, dolor crónico y calambres que afectaban su movilidad, lo cual se consideró como una "limitación física", iv) la condición del demandante era conocida por la entidad antes de su retiro, ya que había solicitado la posibilidad de teletrabajar.

La Sala concluyó que la administración debió ponderar la condición especial del funcionario antes de determinar su retiro, y que, incluso en cargos de libre nombramiento y remoción, es procedente aplicar las garantías de estabilidad laboral reforzada para personas con diversidad funcional.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<div>Consejo de Estado</div> <div>Sala de lo Contencioso Administrativo</div> <div>Sección Tercera</div> <div>Subsección B</div> <div>C.P. Martín Bermúdez Muñoz</div>	<div>Reparación Directa</div> <div><a href="#">13001 23 31 000 2008 00362 01</a></div> <div><a href="#">(55730)</a></div> <div>Sentencia del 12 de abril de 2024</div>
<p>La Subsección resolvió recurso de apelación contra sentencia que negó las pretensiones de demanda con la que se pretendía la declaratoria de responsabilidad de la Policía Nacional por la muerte de una persona durante un operativo para capturar a responsables de una extorsión.</p> <p>La Sala consideró que no se probó que la muerte de la víctima hubiera ocurrido en desarrollo de un enfrentamiento en el que la víctima participara, ni que el uso excesivo de las armas por parte de sus agentes fuera justificado.</p> <p>Concluyó así, que las entidades públicas deben responder objetivamente por daños causados con instrumentos peligrosos bajo su guarda, la carga de la prueba recae sobre la entidad demandada para demostrar causales de exoneración, y al no poder probar la justificación del uso de fuerza letal, la entidad debía ser declarada responsable y pagar los perjuicios demostrados.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<b>Consejo de Estado</b> Sala de lo Contencioso Administrativo <b>Sección Tercera</b> <b>Subsección C</b>  C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas	<b>Reparación Directa</b>  <a href="#"><u>41001233100020110009602</u></a> <a href="#"><u>(60909)</u></a>  Sentencia del 19 de febrero de 2024
<p>La Subsección confirmó sentencia que negó las pretensiones de demanda con la que se pretendía la responsabilidad de la Superintendencia Financiera y de Sociedades y a la Fiscalía General de la Nación por la pérdida de dinero de los inversionistas en DMG Grupo Holding S.A.</p> <p>La Subsección consideró que la Superintendencia Financiera actuó de manera oportuna y dentro de sus competencias al haber: i) adoptado medidas cautelares antes del inicio del proceso de intervención y liquidación judicial, ii) ordenado la suspensión inmediata de operaciones de recepción de dineros del público y la devolución de los dineros recibidos, iii) ordenado la publicación de un aviso en un diario nacional advirtiendo sobre la falta de autorización de DMG para captar dineros.</p> <p>Así mismo, que la conducta de las víctimas (inversionistas) fue determinante en el daño sufrido, al no haber cumplido con su deber de denuncia ante las autoridades competentes sobre el conocimiento que tuvieron de la actividad delictiva realizada por la empresa DMG.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<b>Consejo de Estado</b> Sala de lo Contencioso Administrativo <b>Sección Tercera</b> <b>Subsección C</b>  C.P. Nicolás Yepes Corrales	<b>Reparación Directa</b>  <a href="#"><u>25000232600020120047501</u></a> <a href="#"><u>(68409)</u></a>  Sentencia del 13 de marzo de 2024
<p>La Subsección confirmó parcialmente sentencia que negó las pretensiones de demanda con la que se pretendía la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad.</p> <p>Para la Sala, la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales establecidos en la Ley 600 de 2000 al basarse en una prueba directa (declaración de la víctima) que vinculaba al demandante como presunto autor de acceso carnal violento, y el delito investigado (acceso carnal violento) tenía una pena mínima de 8 años, superando el requisito de 4 años para imponer la medida. Así mismo, la medida se considera necesaria, proporcional y razonable debido a que a) existía</p>	



mérito probatorio suficiente según la ley vigente, b) era necesario impedir la continuación de la actividad delictual y garantizar la presencia del sindicado en el proceso, c) la gravedad del delito justificaba la medida.

Fuera de ello, se destacó la importancia de evitar la revictimización de las mujeres en casos de agresión sexual, los que deben ser abordados con un enfoque diferencial y de equidad de género; reforzando la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de medidas como la detención preventiva en casos de delitos sexuales.

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. José Fernando Reyes Cuartas	<a href="#">Sentencia T-142 del 29 de abril de 2024</a>
<p>La Sala Novena de Revisión conoció tutela que buscaba proteger el derecho a la educación de los estudiantes de la Escuela Manuela Beltrán debido a problemas de infraestructura.</p> <p>Se evidenciaron fallas estructurales en la escuela, incluyendo deterioro general y falta de agua potable. Además, se destacó el problema de los techos de asbesto, cuyo uso está prohibido en Colombia desde 2019 por riesgos a la salud.</p> <p>La Corte determinó que la Alcaldía de El Playón y la Secretaría Departamental de Educación de Santander vulneraron el derecho a la educación al no garantizar una infraestructura digna.</p> <p>El Alto Tribunal, emitió diferentes órdenes tales como: i) Solicitar información sobre convocatorias para mejoras de infraestructura educativa. ii) Elaborar un plan de contingencia para garantizar condiciones educativas adecuadas. iii) Identificar otras instituciones con asbesto y planear su sustitución. iv) Activar la ruta de atención para personas expuestas al asbesto. v) Se instó a la Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto a supervisar el cumplimiento de la sustitución de techos.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. Diana Fajardo Rivera	<a href="#">Sentencia T-120 del 15 de abril de 2024</a>
<p>La Sala amparó los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia a un ciudadano, víctima de conflicto armado, a quien aún no se le ha materializado el cumplimiento de una sentencia de restitución de tierras proferida a su favor en 2018.</p>	

La Corte señaló que la restitución de tierras se enmarca en un "estado de cosas inconstitucional", indicando problemas estructurales en su implementación, una congestión significativa en la jurisdicción especializada en restitución de tierras; y con órdenes de compensación que tardan más de tres años en cumplirse, lo que afecta gravemente los derechos de las víctimas y el Estado de derecho.

La Corte ordenó al Tribunal Superior de Cartagena mantener un seguimiento efectivo al cumplimiento del fallo, con un plazo máximo de seis meses para completar la compensación, instruyó a la UARIV y a la Unidad de Restitución de Tierras diseñar un protocolo para mejorar la coordinación interinstitucional e instó al Consejo Superior de la Judicatura a tomar medidas contra la congestión en los juzgados y tribunales de restitución de tierras.

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. Diana Fajardo Rivera	<a href="#">Sentencia T-124 del 17 de abril de 2024</a>
<p>La Sala tercera de Revisión conoció de tutela promovida por dos adolescentes “Camila” y “Lorena” por ser víctimas de violencia de género dentro y fuera de sus instituciones educativas. Las denuncias involucraban a un familiar cercano (Camila) y a un profesor (Lorena).</p> <p>La Corte identificó falencias en las instituciones educativas tales como: priorización de la disciplina sobre la construcción de entornos seguros, falta de atención a cambios en el comportamiento y rendimiento académico de las estudiantes, se destacó la necesidad de mayor atención por parte de colegios, familias y autoridades en estos casos.</p> <p>La Corte enfatizó la gravedad de la violencia sexual contra menores y la responsabilidad de la sociedad y el Estado, y criticó la falta de acciones contundentes con enfoque de género por parte de los colegios tras las demandas de tutela.</p> <p>La Corte entre otras medidas, le ordenó a los colegios demandados que convoquen y organicen espacios seguros, amplios y participativos de discusión interna sobre las conductas que afectan la convivencia escolar, especialmente las violencias basadas en género, debiendo las instituciones ajustar sus manuales de convivencia.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. Juan Carlos Cortés González	<a href="#">Sentencia T-133 del 23 de abril de 2024</a>
<p>La Sala Segunda de Revisión revisó el caso de una mujer encarcelada que vive con su hija de dos años en prisión. La madre solicitó la sustitución de su pena por prisión domiciliaria, lo cual fue negado inicialmente.</p> <p>Aunque la Corte determinó que el caso de la madre ya había sido resuelto, consideró que los niños que viven con sus madres en prisión tienen protección constitucional reforzada, advirtiéndole que el INPEC, entre otras entidades debe garantizar el goce efectivo de los derechos de la menor de edad.</p> <p>La Corporación ordenó al ICBF mientras la menor se encuentre en el establecimiento de reclusión donde permanece su madre, realicen la evaluación y seguimiento a su caso, y adelanten las gestiones y estrategias idóneas para atender sus necesidades y mitigar los factores de riesgo a su salud, en especial en lo referente al componente nutricional.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
<b>Corte Constitucional</b> M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera	<a href="#">Sentencia T-130 del 19 de abril de 2023</a>
<p>La Sala Séptima de Revisión amparó los derechos de una mujer y su hija en un caso de violencia intrafamiliar, revocando decisiones previas que declararon improcedente el amparo.</p> <p>La Corte determinó que la Comisaría de Familia cometió irregularidades al desconocer la normativa sobre medidas de protección, omitir el enfoque de género en su actuación, proponer una confrontación entre la víctima y el agresor, no valorar adecuadamente la violencia psicológica y las amenazas y generar escenarios de revictimización.</p> <p>La Corte enfatizó la importancia del enfoque de género en estos casos, recordando que la violencia contra las mujeres tiene una dimensión sistémica.</p> <p>En tal sentido, el Alto Tribunal ordenó reiniciar el proceso de violencia intrafamiliar, implementar un plan de capacitación para funcionarios sobre enfoque de género y reiniciar trámites para restablecer los derechos de la hija de la accionante.</p>	



Fuente	Radicación / Fecha
<p data-bbox="232 317 824 376"><b>Corte Suprema de Justicia</b></p> <p data-bbox="302 384 755 427">M.P. Gerardo Botero Zuluaga</p>	<p data-bbox="924 249 1432 336">Sentencia STL16440 -2023 del 15 de noviembre de 2023</p> <p data-bbox="920 389 1435 483"><a href="#"><u>Boletín Tutelas y Sala Plena No. 95</u></a></p>
<p data-bbox="175 491 1448 747">La Sala de Casación Laboral conoció impugnación de fallo de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (Uaegrtd) alegando vulneración de su derecho al debido proceso en contra del Tribunal Superior de Antioquia que rechazó por extemporánea la impugnación de la Uaegrtd a un fallo de tutela, aplicando el plazo de 3 días del Decreto 2591 de 1991.</p> <p data-bbox="175 814 1448 1069">La Corte Suprema de Justicia determinó que se vulneró el derecho al debido proceso de la Uaegrtd. Argumentó que debía aplicarse el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, que establece un plazo más amplio para notificaciones electrónicas, sosteniendo que esta ley es aplicable en materia constitucional y compatible con las normas de tutela.</p> <p data-bbox="175 1137 1448 1284">Según el cálculo correcto de plazos bajo la Ley 2213, la impugnación de la Uaegrtd fue presentada a tiempo, ya que la notificación se entiende surtida dos días después de enviada.</p> <p data-bbox="175 1352 1448 1499">La Corte concluyó así, que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo al interpretar y aplicar erróneamente la norma, vulnerando el debido proceso, por lo que confirmó el fallo de primera instancia que había concedido el amparo.</p>	